

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1° Que, comparece don Marcelo Freyhoffer Moya, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, interponiendo reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia(CPLT), en Sesión Ordinaria N° 1.370, de fecha 6 de julio de 2023, notificada mediante Oficio N° E15297, de fecha 11 de julio de 2023 que acogió el amparo al derecho de acceso a la información pública, deducido por doña María Del Pilar Navarro Schippacasseen autos Rol C-12049-2022, ordenando al Director del Servicio de Impuestos Internos: “a) *Hacer entrega a la reclamante de copia del Oficio Circular N°4 del 2022 del Servicio de Impuestos Internos*”.

Funda la acción en que con fecha 4 de octubre de 2022, la requirente de información solicitó al Servicio de Impuestos Internos “1.- *Toda instrucción que establezca las anotaciones que existen para el evento en que un contribuyente se encuentre en un proceso de recopilación de antecedentes, se haya ejercido la denuncia o querella por el SII (o bien por el consejo de defensa del estado), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del código tributario, se haya formalizado al contribuyente, se lo haya acusado, esté condenado, y hasta que haya cumplido condena. Todo lo anterior, respecto de delitos tributarios. En relación con la misma hipótesis anterior, les solicito toda instrucción que indique los efectos de las anotaciones practicadas por el SII en tales situaciones. En particular, pero no de manera excluyente, les solicito el oficio circular n°4/2022, que entiendo que contiene una regulación sistemática de esta materia.* 2.- *Número de querellas por delitos tributarios presentadas por el SII en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, indicando la suma total de cada año por separado.* 3.- *Número de actas de denuncias por delitos tributarios presentadas por el SII ante los tribunales tributarios y aduanero en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, indicando la suma total de cada año por separado*”.

El requerimiento fue respondido mediante Resolución Exenta N° LTNot 0023682 de fecha 18 de noviembre de 2022 que accedió a la solicitud del numeral 2° y 3°, y denegando la entrega de la información requerida en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: THCTXMEXKWP

numeral 1, en base a lo dispuesto en los artículos 5, 10, 13 y 21, N°s. 1 y 4, todos de la Ley N° 20.285.

Relata que con fecha 28 de noviembre de 2022, el solicitante dedujo, ante el Consejo para la Transparencia, amparo de acceso a la información pública, por la respuesta negativa del Servicio, el que, en sus descargos, evacuados con fecha 13 de enero 2023, reiteró y profundizó los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos en la respuesta dada a la solicitante.

Indica que, en Sesión Ordinaria N° 1370, de 6 de julio de 2023, notificada a su parte con fecha 11 de julio de 2023 por decisión unánime de sus miembros presentes, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia decidió acoger el amparo deducido por el reclamante, respecto a la entrega del Oficio Circular N°4 del año 2022.

Reclama la recurrente que la decisión del Consejo para la Transparencia adolece de dos vicios: Por una parte, la información que se ordena entregar se encuentra amparada por la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285 (Ley de Transparencia o LT), sobre acceso a la información pública, por lo que, no es procedente su entrega, no obstante lo dispuesto en el artículo 28 de la ley señalada; y por otra, la información se encuentra amparada por la causal prevista en el artículo 21 N° 4, de la Ley N° 20.285, atendido a que afecta el interés nacional, en especial los derechos de carácter comercial o económico, lo que, por sí solo, constituye razón suficiente para acoger el presente reclamo de ilegalidad.

Respecto al primer vicio invocado, esto es que la información que se ordena entregar se encuentra amparada por la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285 indica que afecta el debido funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que la entrega de la información no dice relación con un caso determinado y específico, sino que con la función en sí misma y pone en peligro el ejercicio de la función sancionatoria, dado que se divulgarían las acciones que realiza este organismo público, pudiendo inclusive volver ineficaces los procesos de investigación vigentes así como las futuras decisiones y/o resoluciones que se dicten al efecto, todo en relación con los procesos de recopilación de antecedentes por delitos tributarios del Servicio.



Aduce que en el particular también concurre la letra a), del N°1, artículo 21, de la Ley N° 20.285, por cuanto al develar la información relativa a los procesos de recopilación de antecedentes por delitos tributarios del Servicio, se afectarían diversos hechos en los cuales el Servicio aún no ha decidido el ejercicio de la acción penal tributaria y las defensas jurídicas y judiciales, respecto a los diversos juicios penales tributarios, que el reclamante mantiene en actual tramitación. Lo anterior, atendido que, parte de información requerida se vincula con teoría de los casos y las pretensiones del Servicio en los diversos juicios.

Por otro lado, también aduce que concurre la causal establecida en el artículo 21 N°1 letra b) de la Ley N°20.285 dado que la publicidad del oficio circular ordenado entregar por el Consejo para la Transparencia significaría develar un antecedente necesario en relación con las resoluciones, medidas que dicte el Servicio respecto de las investigaciones de hechos constitutivos de un delito tributario.

En relación con el segundo vicio invocado, esto es, que la información ordenada entregar por el CPLT, se encuentra amparada por la causal de reserva prevista en el número 4 del artículo 21 de la LT, señala que la publicidad del oficio circular ordenado entregar por el Consejo para la Transparencia, afecta el interés nacional y específicamente los intereses económicos del país.

Al efecto, refiere que el Oficio Circular requerido, imparte instrucciones respecto al “Proceso de sanción del delito tributario”, que, entre otras cosas, entrega instrucciones respecto a las formas internas para detección de delitos tributarios, la metodología utilizada en la investigación, los recursos materiales e informáticos con que cuenta el Servicio, la descripción de roles estratégicos, entre otros, lo que, en manos de terceros ciertamente podría generar riesgos dentro del proceso de recopilación de antecedentes y asimismo, en otros procedimientos de fiscalización respecto de personas -contribuyentes- relacionados con el procedimiento de recopilación de antecedentes por delitos tributarios, previsto en el artículo 161 N°10 del Código Tributario, al hacerse vulnerables etapas claves; sin perjuicio del uso indebido y contrario a los fines por los cuales este oficio circular fue impartido.



De esta forma refiere que se afectaría la función fiscalizadora del cumplimiento tributario lo que afectaría los intereses económicos del Estado, específicamente los originados en la recaudación fiscal, ya que existiría un menor nivel de ingresos públicos, configurándose la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 4 de la LT.

Por lo anterior, solicita se revoque el acuerdo adoptado por el Consejo respecto a la entrega del oficio circular N°4 del año 2022 emitidos por el Servicio de Impuestos Internos durante el año 2022, estableciendo que se rechaza el amparo interpuesto por el peticionario en lo pertinente, en razón de encontrarse amparada la información por las causales de reserva establecidas en los N°s.1° y 4°, del artículo 21, de la Ley N° 20.285.

2° Que, a su turno informa el Director General del Consejo para la Transparencia, solicita el rechazo de la reclamación.

Luego de exponer los antecedentes de hecho que originaron el presente reclamo, precisa en cuanto al fondo de la acción, que se declaró inadmisibile el reclamo respecto del primer vicio invocado y que, por lo mismo sólo se tiene por interpuesto el reclamo en lo que respecta a la causal del artículo 21 N° 4 de la Ley 20.285, por lo que debe centrarse el reclamo a dicha causal.

Informando al tenor de la misma, indica que la información solicitada es pública, que se trata de un acto administrativo interno de un órgano público en el cumplimiento de sus funciones públicas advirtiéndole que, en virtud del principio de publicidad, la información en comento es susceptible de ser requerida y entregada por vía de la Ley de Transparencia, en virtud de su carácter público.

De esta manera, explica que la Decisión de Amparo C-12049-2022 no resulta ilegal al disponer la entrega del oficio circular ya referido, por cuanto no tienen la potencialidad de afectar el interés nacional en forma presente o probable y con suficiente especificidad, por lo que no se configura en la especie la causal de reserva invocada por la reclamante. Al respecto, señala que es deber de los órganos obligados por la Ley de Transparencia, acreditar la efectiva afectación del bien jurídico que justifica la pretensión de reservar información de carácter esencialmente pública, lo que obedece a una exigencia legal del inciso 2° del Art. 8° de la Constitución Política de la



República, y es necesario y fundamental para determinar si la específica información pedida se encuentra cubierta o no por la reserva alegada.

Hace presente que el SII no señaló detallada y fundadamente, ni demostró en grado alguno, la forma en que la entrega del oficio circular en análisis pudiese afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, agrega que ni siquiera se aportó el oficio circular para que pudiera ser analizado en concreto y que tampoco explicó suficientemente los fundamentos para considerar que la publicidad de la información requerida facilitaría el despliegue de conductas por parte de los contribuyentes que dificulten las acciones fiscalizadoras o que le permita burlar o sustraerse de los efectos de éstas.

Concluye que la Decisión de Amparo Rol C-12049-2022 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al Art. 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia.

3° Que, a su vez, la tercera interesada María Pilar Navarro Schiappacasse, se hizo parte y formuló sus descargos y observaciones, solicitando el rechazo del reclamo.

Refiere en primer lugar que el Servicio reclamante equipara las facultades de fiscalización que legalmente detenta para establecer si los contribuyentes cumplieron debida y oportunamente con la declaración de los impuestos respectivos, con las que tiene en materia penal.

Al efecto, indica que el oficio circular N° 4/2022, se enmarca en el proceso de recopilación de antecedentes, que busca identificar si los contribuyentes no sólo incumplieron con la declaración y pago de la obligación tributaria, sino que, además, infringieron el ordenamiento jurídico verificando una conducta tipificada como delito tributario-

En ese sentido indica que el fisco no acreditó el perjuicio reclamado.

En segundo lugar, en cuanto a la supuesta afectación al interés nacional refiere que la finalidad perseguida con la entrega de la información no es posibilitar el incumplimiento de contribuyentes, sino que controlar la actuación del servicio y que tampoco el reclamante logró acreditar la afectación al interés nacional.



Finalmente refiere que desde el momento en que una instrucción interna afecta derechos de los contribuyentes, ésta debe ser de conocimiento general.

4°.- Que de acuerdo con la Ley de Transparencia, la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella; a la vez que, las autoridades, cualquiera sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública (Arts.3° y 4°, inciso 1°).

5°.- Que, por otro lado, las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrán denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las previstas en el artículo 21 de la LT. Así las cosas, en este caso se debe determinar si la decisión de amparo Rol C-12049-2022 dictada por el Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° Sesión Ordinaria N° 1.370, de fecha 6 de julio de 2023, notificada mediante Oficio N° E15297, de fecha 11 de julio de 2023 resulta ilegal por afectar la publicidad del Oficio N°4/2022 el interés nacional y los intereses económicos o comerciales del país.

6° Que, en este contexto cabe señalar que, por un lado, el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República consagra el principio de publicidad de la información pública de manera restringida al disponer que: *“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”*, el N° 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental cautela la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Sin embargo, la ley, en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley N° 20.285, establece el principio de publicidad respecto de la información *“elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.”*

Por su parte, el inciso segundo del artículo 10 prescribe que: *“El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes,*



contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.”

A su turno, la letra c) del artículo 11 dispone que: *“El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios: [] c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual “... toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.”*

7º Que, de conformidad con el texto de las normas aludidas precedentemente, es manifiesto que concepto de “documento” incluye el oficio circular solicitados, toda vez que se encuentra en poder de un órgano de la Administración regulado por la Ley N° 20.285 en los términos indicados. En lo referido a este caso, el Servicio de Impuestos Internos. Tampoco cabe duda que dicho oficio circular ha sido elaborado con presupuesto público, utilizando equipamiento de propiedad del Estado, para el ejercicio de sus competencias públicas. En consecuencia, a juicio de esta Corte, la información detenta una naturaleza eminentemente pública, por lo que es válido solicitar la información por la vía intentada.

8º Que, es preciso destacar que el Servicio reclamado no aportó antecedentes en el procedimiento administrativo que sustentaran sus alegaciones de que la entrega de la documentación solicitada podría implicar que la revelación de métodos de trabajo, estrategias y mecanismos específicos relativos a la función fiscalizadora del cumplimiento tributario, como la dictación oficios circulares que buscan proteger la seguridad de la información y de los sistemas de trabajo y cuya divulgación podría afectar el interés nacional facilitando conductas de los contribuyentes que dificulten las acciones fiscalizadoras.

9º Que resulta medular recordar que por mandato constitucional, solo es posible establecer la reserva o secreto a través de una ley de quórum calificado, pero a condición de que la publicidad afecte ciertos valores, mencionando entre ellos a la seguridad de la Nación y al interés nacional, entre otros. De lo anterior, se deduce, entonces, que ha sido el propio constituyente el que exige una lesión efectiva al bien que se busca proteger.



No se refiere a que dicha publicidad “tenga el potencial de afectar” sino que – como ya se ha dicho-, debe afectar efectivamente la seguridad o el interés nacionales. Dicha apreciación debe efectuarse en concreto, de lo que se colige que quien pretenda valerse de la reserva debe demostrar la necesidad de que se niegue lugar a la publicidad buscada.

10º) Que no puede pretenderse que tanto el CPLT como esta Corte meramente supongan la veracidad las aseveraciones de la reclamante en cuanto a que los datos que se consignaren en el oficio circular de marras, son de tanta relevancia y sensibilidad y que afecten de tal manera el interés y la seguridad de la nación al extremo tal de que se les aplique la excepción de reserva o secreto. Esto corresponde acreditarlo al reclamante, empero, aquí, nada de ello fue comprobado.

11º) Que coherente con lo que se viene razonado, la decisión de amparo recurrida adoptada por el Consejo para la Transparencia, se halla ajustada a derecho, ya que se ha dictado dentro de las atribuciones y competencias que la ley expresamente le ha conferido, en conformidad además con lo dispuesto en los artículos 8 y 19 N° 12 de la Constitución, no configurándose entonces ilegalidad alguna en la Decisión de Amparo impugnada por medio de este reclamo. Así las cosas, no existiendo razones atendibles o motivos demostrados que legitimen la reserva de información, debe prevalecer la publicidad del acto.

12º) Que, a mayor abundamiento, lo anterior ha sido ya resuelto por esta misma Corte en autos Rol 473-2023 en que se rechazó un reclamo de ilegalidad por la misma causa, respecto de los oficios circulares del año 2022 – que incluye el oficio circular 4/2022 cuya divulgación se solicitó- , sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y 21 N°4 y 28 de la Ley de Transparencia, **SE RECHAZA sin costas**, el recurso deducido en esta causa.

Regístrese y oportunamente archívese.

Redactó la abogada integrante señora Vidaurre.

Contencioso administrativo N° 482-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: THCTXMEXKWP

No firma la ministra señora Durán Madina, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: THCTXMEXKWP

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: THCTXMEXKWP